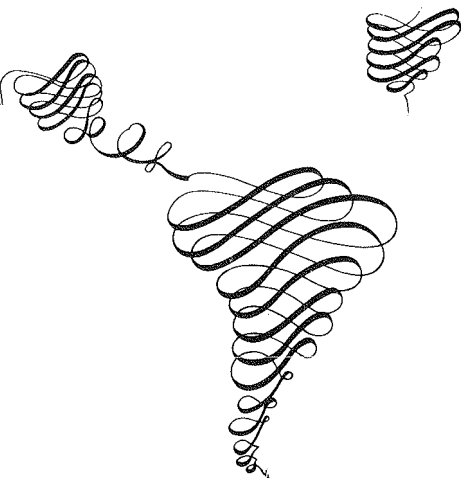




Elecciones, lecciones y preocupaciones

LA campaña electoral y las mismas elecciones han hecho aflorar problemas que los ciudadanos españoles tenemos que abordar de forma práctica y permanente, no sólo vocinglera y cuando abordarlos significa mendigar un voto o arrebatárselo al adversario. Por otra parte, el Gobierno salido de las urnas será parlamentariamente mucho más débil que el anterior a la convocatoria de elecciones. Si entonces se justificaron las elecciones anticipadas como un medio para reforzar el Ejecutivo, detener el acoso de la oposición y restaurar la confianza civil en la clase política, ninguno de los tres objetivos parecen conseguidos: el nuevo Gobierno será más débil en el Parlamento, más zarandeado por la oposición y menos depositario de la confianza popular.

Durante la campaña, cada partido ha agrandado las miserias de sus adversarios y ha silenciado las propias, ha puesto sordina a sus defectos y altavoz a los ajenos. Al terminar la campaña nos ha quedado a todos una saliva ácida y la sensación de que entre los insultos y acusaciones no se vislumbran soluciones. Este comentario querría aportar algunas líneas de reflexión ético-política:

1. Los partidos son cauces imprescindibles, pero no totalizadores de la democracia. En la campaña los partidos se nos han presentado como causa directa y única de los

éxitos o fracasos; se nos han ofrecido como la única percha de nuestra esperanza o de nuestra desesperanza. Hemos visto España enteramente en los espejos cóncavos de la clase política. Y ésta es una imagen deformada. Los partidos crean y canalizan la opinión, reciben el mandato popular y las urnas los califican o descalifican como gestores de lo público. Pero en modo alguno pueden considerarse como totalizadores de toda expresión democrática. El éxito de los ochenta es tanto de la sociedad como del PSOE que lo gestionó; de los fracasos de los últimos años es tan culpable la sociedad como el PSOE. La corrupción se ha instituido tanto en la clase política como en la sociedad civil. Esta España, grande y miserable, es obra de todos. Ningún partido puede arrogarse el mérito entero de haberla fabricado ni ser acusado de causar todos los males de la patria. Por lo mismo, el futuro dependerá tanto o más de las reacciones del cuerpo social que de los actos de la clase política que nos gobierne. En esta hora de polarización de toda la vida nacional en los partidos, conviene rescatar el énfasis en la necesidad de fortalecer los grupos intermedios: el asociacionismo profesional, los grupos de proyectos afines, tanto si se trata de proyectos educativos, ecológicos, alternativos, pacifistas, etc., como si se trata de la cría de canarios en jaulas de bambú. Los grupos sociales articulan, dinamizan, y hacen adulta la democracia. Los partidos políticos pueden potenciar, pero nunca sustituir la genuina acción ciudadana.

2. Urge delimitar los ámbitos del poder político y de los poderes económicos. Durante la transición se trató con exquisito cuidado a los que entonces se llamaban **poderes fácticos** (Ejército, Iglesia, Dinero) a los que se atribuía un carácter de potencial amenaza contra la democracia. De estos tres poderes fácticos dos han pasado de ser considerados sospechosos a erigirse en piezas clave de la democracia: el Ejército, con el fracaso del 23-F, se curó homeopáticamente de sus veleidades golpistas y hoy constituye una institución políticamente neutral y lealmente sometida al poder civil; la Iglesia ni se identifica ni beligerante contra ninguna legítima opción, acepta la divergencia, y la jerarquía mantiene, a pesar de matices y equívocos aislados, una

cuidada neutralidad. En cambio, sobre el poder del dinero, gravita todavía la sospecha de que mediatiza las decisiones políticas: hay grupos económicos poderosos que manifiestamente han apoyado al PSOE o sugerido coaliciones y otros que han apoyado al PP. ¿A cambio de qué? El fin de cualquier grupo económico o financiero es ganar dinero; si apoya a un partido es porque espera favores, información privilegiada o impunidad. No tenemos la ingenua candidez de pensar que estas corruptelas se corregirán con sólo denunciarlas. Por eso, a la denuncia de interferencias, pactos y padrinazgos urge añadir la demanda de que se extreme la delimitación de esferas y que se regulen jurídicamente los grupos de presión.

3. Urge dignificar el debate político y reducir el número de enfrentamientos en los medios de comunicación. La campaña ha crispado a los contendientes y, lo que es mucho más preocupante, ha crispado a los ciudadanos: llamar mentiroso al adversario, verter sospechas infundadas sobre su honorabilidad personal, desempolvar expedientes, someter su vida privada a la vigilancia de detectives y otras mezquindades del mismo género han contribuido a que apareciera como mezquina la misma figura del político. Por ello, muchos debates no resultaron digeribles para los estómagos de buen gusto. Además, las comparecencias en los medios de comunicación han sido tantas y tan plomizas que se ha matado, por saturación, la apetencia de escucharlos. No basta con acortar la campaña oficial —medida que aplaudimos—; es también necesario acortar la campaña real.

4. Urge regular la financiación de los partidos. El principal origen de la corrupción está en que los partidos (todos) necesitan ingentes caudales para su financiación. El voto se consigue con propaganda y la propaganda bien hecha es cara. Existe una relación directa entre el número de votos obtenidos y el dinero invertido por cada partido. Ello explica la voracidad de los partidos y ese pudoroso no querer indagar el origen de los fondos que llegan a sus arcas. Las prácticas de corrupción «piadosa» por la causa son bien conocidas: asignaciones directas, «impuesto revolucionario» por obtener una contrata o una concesión, cuentas de proveedores ficticios,

facturas de trabajos nunca realizados, recalificaciones a cambio, créditos que no se devuelven, etc. Urge que se plantee una limitación y un control diáfano de la financiación de los partidos. Si esto no se hace a tiempo, el descrédito de la clase política hará inviable la financiación pública. No olvidemos que, en Italia, la ciudadanía ya lo ha rechazado en referéndum.

5. Durante la campaña electoral debería haber un gobierno de gestión del que no formará parte ningún candidato. *La práctica universal de que el Gobierno que convoca las elecciones permanezca en funciones durante la campaña es perjudicial para el país. Esta práctica, además de colocar al gobierno saliente en cierta posición de ventaja, mediatiza las decisiones del Ejecutivo por cuanto se toman o aplazan decisiones, no en función de los intereses del país, sino en función de los intereses electorales. Si, por ejemplo, en vez de estar presidido por el candidato González, el Gobierno de España hubiera estado presidido desde el 12 de abril por una persona sin intereses electorales, es casi seguro que, por las mismas fechas, la peseta habría sido devaluada. La racionalidad exigía ajustar a la baja la paridad, pero el negativo efecto electoral impidió al candidato-presidente hacer a tiempo lo que debía y sólo devaluó a mediados de mayo, cuando las divisas estaban agotándose. El precio de este retraso fue de varias decenas de miles de dólares que se destinaron a comprar humo, pero no sirvieron para apagar el fuego de la especulación.*

A estas elecciones a posteriori, deberíamos añadir la preocupación por la gobernabilidad del país. Si España necesitaba un Gobierno fuerte, parece claro que el que se forme será, al menos parlamentariamente, mucho más débil que el existente a principios de abril. El sentido de voto útil ha creado artificialmente un bipartidismo imperfecto, y el desdibujamiento del CDS ha dejado a este país sin una bisagra política capaz de formar gobierno tanto con el PP como con el PSOE. Los pactos posibles encierran riesgo y precariedad. Todos los indicios auguran una vida breve al futuro Gobierno.